INFORME BREVE SOBRE ASPECTOS MAS IMPORTANTES

A. Bases esenciales de la institucionalidad chilena y evolución institucional futura.

En el llamado discurso de Chacarillas el General Pinochet anunció los futuros pasos que daría en el proceso de institucionalización; según lo expresado en ese entonces, la denominada fase de "transición" sería regida por un conjunto de Actas Constitucionales, las que se completarían antes del 31 de Diciembre de 1980.

El 18 de Marzo de 1977 al hablar el General Pinochet por cadena nacional, en la que se refirió a la proscripción de todos los partidos políticos llevada a efecto en aquellos días, anunció que "durante el presente año -- (1977) corresponderá avanzar en la elaboración de nuevas Actas Constitucionales sobre materias que se refieren a los órganos del Estado, las que habrán de dar una visión más completa de la nueva estructura institucional que estamos construyendo".

En la actualidad se encuentran vigentes las Actas N°s. 1 y 2; el Acta N°3 está vigente, pero no en su plenitud, por cuanto aún no se han dictado las leyes complementarias que establecían sus artículos transitorios, además de regir aún la norma que hace improcedente el recurso de protección establecido en esta Acta; del Acta N°4 tienen vigencia solamente los artículos 13 y 14, por cuanto aún no se ha dictado la ley complementaria que establecía su artículo transitorio.

En consecuencia, en la práctica, las Actas Constitucionales no han sido una realidad plena aún y la trascendencia de ellas en la institucionalidad no ha sido más --

que una fachada.

El 5 de Abril del presente año, el General Pinochet habló por cadena nacional respecto del asunto de la investigación del asesinato de Orlando Letelier; en esa misma oportunidad, se refirió también a algunas modificaciones que había resuelto introducir al plan anunciado en Chacarillas.

De acuerdo con lo expresado en esa oportunidad, la fase de "transición" será regida ya no por las Actas Constitucionales, sino que por la Constitución Política. Esta, que según el discurso de Chacarillas entraría a regir en el año 1985 ó 1986, será adelantada y antes del 31 de Diciembre del presente año deberá estar completada por la Comisión Constitucional, para luego ser aprobada en definitiva por la Junta de Gobierno y después ser sometida a plebiscito. De este nuevo anuncio destacan dos hechos -- fundamentales:

a. No contempla en ningún momento la participación de la comunidad nacional en alguna de las fases de elaboración del proyecto que finalmente el pueblo deberá aceptar o rechazar. Solamente les corresponde participar a la Comisión Constitucional, designada por la Junta de Gobierno; al Consejo de Estado, igualmente designado por la Junta de Gobierno; y, a la propia Junta de Gobierno.

b. Este anuncio no establece plazo concreto dentro del cual la Junta de Gobierno deberá aprobar el texto definitivo, como tampoco, plazo dentro del cual se llevará a efecto el plebiscito.

El proyecto institucional que el General Pinochet ha anunciado ha estado, al igual que sus modificaciones, directamente vinculado a los trastornos y zozobras de permanencia que ha sufrido el régimen militar; así fue como el General Pinochet inmediatamente después de la "consul-

ta nacional" de enero pasado, anunció al pueblo que se--
 olvidara de elecciones, "por lo menos antes de 10 años".
 En su discurso de 11 de Septiembre de 1977 había expresa-
 do que "el discurso de Chacarillas corresponde a un sóli-
 do convencimiento de quien les habla, madurado desde ha-
 ce largo tiempo en el Gobierno, razón por la cual su con-
 tenido fundamental no está sujeto a cambios". Los he --
 chos muestran claramente la inconsistencia del anunciado
 proyecto y la verdadera motivación del Gobierno Militar-
 al formular los anuncios expuestos.

B.- Del Estado de Sitio al Estado de Emergencia.

El 11 de Septiembre de 1977, mediante Decreto Ley-
 N° 1.880, la Junta de Gobierno renovó el estado de sitio
 en todo el territorio nacional; aquella vez fue declara-
 do en el grado de "simple conmoción interior". Según es-
 tablece el Decreto Ley N° 640, de Septiembre de 1974, el
 estado de sitio en aquel grado procede declararlo "en --
 los demás casos previstos en la legislación vigente". -
 Sin embargo, el Gobierno no pudo invocar alguno de esos-
 casos, puesto que ninguna disposición legal se refiere a
 ellos.

Pese a haberse rebajado en un grado el estado de -
 sitio en aquel entonces, la situación de la libertad per-
 sonal y otros derechos suspendidos, no varió en forma al-
 guna, puesto que se mantuvieron los mismos efectos del -
 estado de sitio en grado de seguridad interior, vigente-
 hasta esa fecha. No fue más que un cambio de nombre.

El nuevo período del estado de sitio se extendió -
 hasta el 10 de Marzo del presente año, fecha en que se -
 declaró al país en estado de emergencia. Este estado de
 emergencia actualmente vigente, contemplado en la Ley de

Seguridad del Estado, sufrió una alteración radical en Agosto de 1977, cuando la Junta de Gobierno, preparando el término del estado de sitio, modificó tal ley, - precisamente en lo referente al estado de emergencia, y creó un nuevo régimen de excepción jurídica más semejante al estado de sitio que a aquel estado de emergencia contemplado anteriormente en la ley.

Como causal para declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, el Gobierno invocó la existencia de "calamidad pública", requisito establecido en la Ley de Seguridad del Estado. Esta causal, - agregada al texto primitivo de aquella Ley en Julio de 1960, a raíz de los sismos que azotaron gran parte de la zona sur del país, está referida a las catástrofes físicas representadas por fenómenos de la naturaleza - (terremotos, sequías, pestes, plagas, inundaciones, epidemias u otras situaciones análogas), según la finalidad de la ley, que fue, precisamente, la de favorecer a los damnificados por los sismos a que se ha hecho referencia. En ningún caso tal concepto es aplicable, ni aún cuando se le interprete extensivamente, a la situación actual del país, y mucho menos aún, a todo el territorio nacional. Se trata pues de otorgar - una fachada legal a los actos de Gobierno.

De modo entonces que el país sigue viviendo bajo un régimen jurídico de excepción, que comprende, desde luego, todos los efectos tradicionales del estado de emergencia, entre los que se cuenta la designación de Jefes Militares en todas las zonas del país, quienes poseen amplias facultades para resguardar el orden, como por ejemplo, la de restringir el desplazamiento de los ciudadanos en la zona bajo su autoridad y la de dictar bandos que limitan la libertad de información. Pero, además, y de acuerdo con las modificaciones intro

ducidas por el Gobierno Militar, por medio del Decreto Ley N° 1.877, de Agosto de 1977, los ciudadanos pueden ser detenidos por orden del Presidente de la República, hasta por el plazo de 5 días, en sus propias casa o lugares que no sean cárceles. En cuanto a esta facultad cabe formular dos calcances: en primer lugar, la modificación eliminó la frase que al respecto contemplaba el estado de sitio de arrestar a las personas en lugares que "no fueren destinados a reos comunes"; en consecuencia, por ejemplo, los detenidos ahora podrían -- ser llevados a los cuarteles de Investigaciones o a -- los de Carabineros. En segundo lugar, el plazo de 5 días en realidad puede extenderse a 15, ya que los servicios de seguridad pueden mantener bajo arresto a una persona durante 10 días antes de ponerla a disposición de un juez (artículo 13 del Acta Constitucional N°4).

Asimismo, de acuerdo con las modificaciones que la Junta de Gobierno introdujo a la ley que contemplaba el estado de emergencia, se otorga al Presidente de la República la facultad de disponer la expulsión o -- abandono del país de determinadas personas, "cuando -- así lo requieren los altos intereses de seguridad del Estado" (haciéndose extensivo al estado de emergencia lo dispuesto en el Decreto Ley N°81).

Finalmente, se mantienen las restricciones a la actividad sindical establecidas en el Decreto Ley N° 198.

En consecuencia, el estado de emergencia actualmente vigente presenta gran similitud con el estado de sitio que regía hasta Marzo, en virtud de las modificaciones legales que introdujo la Junta de Gobierno.

C.- Amnistía Decretada por el Gobierno el 19 de Abril de 1978.-

Por Decreto Ley N°2.191 de 18 de Abril del presente, y publicado en el Diario Oficial del 19 de Abril, el Gobierno concedió amnistía a una amplia gama de personas, según se detalla más adelante.

a.- Motivación de la amnistía.

Esta amnistía fue dispuesta por la Junta de Gobierno teniendo en consideración los siguientes tres factores:

1°.- La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente el país. La relevancia de esta situación es señalada en el texto legal, en forma muy especial, por el término del Estado de Sitio y del toque de queda en todo el territorio nacional.

Observación: Aún cuando es cierto que se puso término al Estado de Sitio el pasado 10 de Marzo, y que con posterioridad se puso término al toque de queda vigente para las personas, es igualmente cierto que el país se encuentra siempre bajo un régimen jurídico de excepción, cual es el estado de emergencia. Este régimen de excepción presenta una gran similitud al estado de sitio que estaba vigente hasta el 10 de marzo, por la modificación introducida al mismo en Agosto del año pasado por la Junta de Gobierno. Para declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, el Gobierno invocó como causal la "calamidad pública", cuyo alcance no ha sido explicitado por las autoridades responsables. También es cierto que el toque de queda rige hoy bajo la forma denominada de "restricciones" a los desplazamientos nocturnos de vehículos motorizados y cualquier medio de movilización que consuma energía;

esta medida ha sido justificada por el Gobierno por razones de índole económico.

2°.- El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unan a la nacionalidad chilena, dejando atrás -- odiosidades hoy carentes de sentido, y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos.

Observación: El postulado señalado es compartido -- ampliamente por quienes desean que se ponga término a la situación que ha vivido el país durante los últimos años; sin embargo, hay ciertas cuestiones pendientes que, en nuestra opinión y de acuerdo con nuestro ámbito de trabajo, no podemos dejar de mencionar; está, en primer lugar, la situación de 571 personas desaparecidas, respecto de las cuales esta Vicaría de la Solidaridad ha solicitado a los tribunales de justicia la investigación de las circunstancias en que tales hechos han ocurrido. En muchos de estos casos existen antecedentes fidedignos de que el desaparecimiento ha sido consecuencia del arresto practicado por los agentes de los servicios de seguridad, en especial, la DINA; en otros casos, los antecedentes disponibles permiten presumir tal eventualidad. En segundo lugar, otra situación importante es aquella que se refiere a la existencia de personas sometidas en la actualidad a procesos militares bajo procedimientos de tiempo -- de guerra, lo que constituye, según se ha expuesto detalladamente a esos propios tribunales y a la Corte Suprema de Justicia, el juzgamiento por comisiones especiales, contrarios a nuestras normas fundamentales y que atentan contra el derecho a un proceso regular.

3°.- La necesidad de una férrea unidad nacional -- que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad--

que debe regir los destinos del país.

Observación: El avance hacia una nueva institucionalidad requiere ciertamente de una férrea unidad nacional, pero, tan importante como ella, e incluso como base para su concreción, es la participación de todo el pueblo en el proceso. Como lo declararon los Obispos de Chile, las premisas básicas se encuentran en la existencia de "una Constitución, vieja o nueva, ratificada por sufragio popular" y de "leyes dictadas por legítimos representantes de la ciudadanía" (Nuestra Convivencia Nacional, Marzo de 1977).

b.- Significado de la amnistía.

El efecto propio de la amnistía consiste en anular la existencia de responsabilidad criminal de los eventuales autores, cómplices o encubridores, haciendo desaparecer el delito y sus consecuencias.

c.- Alcance de la amnistía.

Se concede amnistía a las siguientes personas:

1º.- Todos aquellos que, en calidad de autores, cómplices, o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia del estado de sitio (11.9.73-10.3.78), a menos que se encuentren actualmente sometidos a procesos o condenados. (art. 1º)

Observación: Este artículo comprende tanto a aquellos que han cometido delitos comunes como a los que han cometido delitos políticos que, eventualmente pudieron ser procesados por tribunales ordinarios o militares, con la sola condición de que ellos hayan sido cometidos dentro de un determinado período (vigencia del estado de sitio) y que los responsables no se encuentren actualmente sometidos a proceso o condenados. De esta forma, y siempre dentro del ámbito jurídico que nos corresponde cono-

cer, los responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por ejemplo, de la muerte de Marta Ugarte, de Enriqueta Reyes (muerta en casa de Padres-Columbanos), de Ignacio Ossa Galdámez, (muerto mientras estaba arrestado por estado de sitio) de Cedomil Lausic Glasinovic (muerto en Villa Grimaldi), etc. se benefician con esta amnistía. En la misma situación se encuentran los criminalmente responsables de las apremios ilegítimos, homicidios, violaciones de domicilio, incomunicación in de bi da, cometidos en las personas de los desaparecidos durante el período señalado. En todo caso, mientras no se ponga término al ocultamiento de las personas desaparecidas, los secuestros, arrestos ilegales, incomunicaciones inde bi das cometidos en sus personas, son de con sumación per man en te, por lo que las investigaciones judiciales deben proseguir, ya que tales delitos se prolongan más allá del 10 de marzo de 1978.

Sin lugar a dudas, después de la intensa acción de los servicios de seguridad en contra de los disidentes del régimen, pocos de ellos que hayan incurrido en conductas susceptibles de ser calificadas de delito político, han logrado eludir ser apresados y luego permanecer arrestados por el estado de sitio, o procesados por tribunales militares, o expulsados del país, o bien, desaparecidos. En cambio, la mayor parte de los funcionarios de las fuerzas armadas y servicios de seguridad—que puedan haber cometido delito contra las personas, no han sido sometidos a proceso, de tal manera que con la amnistía se extingue la posibilidad de hacer efectiva su responsabilidad criminal, con la sola excepción señalada en relación a delitos de consumación permanente en las personas de los desaparecidos.

2º.- Las personas que se encuentran condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiem

bre de 1973. (Art. 2°).

Observación: Este artículo favorece igualmente a aquellas personas que ya han obtenido la conmutación - de sus penas por la de extrañamiento (D.504). Las que aún no han salido al extranjero no están obligadas a hacerlo, y si lo hicieren podrán salir como cualquier ciudadano.

Para los que ya se encuentran en el extranjero, - acogidos al Decreto 504, el artículo 5° restringe los efectos de la amnistía, por cuanto, para regresar al país -lo que en derecho procede porque el efecto - del extrañamiento también es cubierto por la amnistía- deberán contar con la autorización previa del Ministerio del Interior, de acuerdo con lo que dispone el art. 3° del D.L. N°81.

d.- Situaciones no comprendidas.

1°.- No podrán acogerse a la amnistía aquellas personas señaladas en el art. 1° que, eventualmente pudieren tener responsabilidad criminal por los delitos que señala el art. 3°.

Observación: Entre estas excepciones no se encuentran una serie de delitos que importan una especial gravedad, por el bien jurídico protegido: homicidio (incluso el homicidio calificado), apremios ilegítimos a detenidos, arresto ilegal, secuestro, violación de domicilio, hurto, incomunicación indebida, falsificación de instrumento público o privado.

2°.- No son favorecidas por la amnistía aquellas personas que aparecieron responsables de los hechos - que se investigan en la causa rol N°192-78 del Juzgado Militar de Santiago.

Observación: Según declaró el señor Ministro del Interior este proceso corresponde al que sustancia el

General Orozco, en calidad de fiscal ad-hoc, por falsificación de pasaportes oficiales.

D.- Situación de desaparecidos.-

La situación de cientos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas se ha visto agravada, como se desprende del capítulo anterior, luego de decretarse por el gobierno una amnistía general.

Pese a reiterados compromisos del gobierno ante organismos internacionales y del propio Presidente de la República ante el país, las autoridades aún no han dado respuesta a la demanda de esclarecimiento de las situaciones de desaparecimiento.

Cabe agregar que, pese a que el delito de secuestro es permanente y los arrestos ilegales e incomunicaciones indebidas en recintos secretos a que han sido sometidos los desaparecidos son de consumación actual, los tribunales de la Justicia del Crimen que conocían de las causas sobre dichos delitos han puesto término definitivo a las investigaciones, sobreseyendo los procesos en virtud precisamente de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley N°2.191, ignorándose actualmente la actitud que adoptarán los Tribunales Superiores de Justicia frente a la interpretación que, de dicho decreto de amnistía, han hecho los jueces del crimen, la que agrava extremadamente la situación de los desaparecidos y de sus familiares.

Por último, una presentación hecha por los familiares de los desaparecidos al Ministro del Interior Sergio Fernández, luego de decretada la amnistía, en la cual se plantean las interrogantes que emanan del texto del artículo 1° de dicho decreto, aún no ha recibido respuesta oficial.

E.- Libertades Intelectuales y de Información.

1. Radio. Cese de concesión a Radios Cooperativa. El 21 de Julio de 1977 en declaración pública de la Dirección de Informaciones de Gobierno, motivada por una carta enviada por familiares de detenidos desaparecidos al General Pinochet y leída en uno de los noticieros de Radios Cooperativa, se dijo: "Algunos medios, sin embargo, haciendo mal uso de las prerrogativas que a la función periodística confiere la irrestricta libertad de prensa — existente en Chile, se han colocado al servicio de intereses políticos subalternos, en desmedro del derecho de la ciudadanía de estar informada correctamente, y lo que es más grave aún, en detrimento de los superiores intereses de la Patria"; más adelante agregó tal declaración: "aún más, cegados por la pasión política, por sus intereses particulares, o los de los grupos a quienes sirven, llegan a imputar a S.E. el Presidente de la República, declaraciones o conductas inexistentes, como parte evidente de la campaña orquestada, encabezada entre otros — medios, por las radios Cooperativa, Santiago, y otros, como lo fuera en el pasado la Radio Balmaceda...".

En Noviembre de 1977 el Subsecretario de Telecomunicaciones anunció que, por decreto firmado por el General Pinochet, se canceló la concesión a las siguientes emisoras: Cooperativa de Antofagasta, onda larga y corta; Cooperativa de Santiago, onda corta; Cooperativa de Concepción, onda corta; Cooperativa de Valdivia, onda larga; Cooperativa El Sur de Chile; Cooperativa de Puerto Montt, onda larga; Cooperativa de Punta Arenas, onda larga; Cooperativa de La Serena. En virtud de esta medida las radios Cooperativa debieron silenciar sus ondas desde el 31 de Diciembre de 1977.

Las emisoras cuya concesión se canceló funcionaban,

la más antigua, de 1933, y, la más nueva, desde 1942.

2. Ediciones y publicaciones. El bando N° 107 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia, que establece restricciones a las libertades de opinión y de información, se encuentra aún vigente. Numerosos sectores del país han hecho oír su opinión contraria a esta norma, sin embargo, lo único que se ha logrado hasta el momento, por parte de la autoridad militar de Gobierno, ha sido la promesa de reestudiar la posible derogación del bando.

3. Restricciones a la libertad de información. En dos ocasiones la autoridad militar ha dictado bandos prohibiendo "la difusión por los medios de comunicación social de toda noticia, comentarios, réplicas, críticas, declaraciones, manifiestos, exposiciones, discursos y comunicaciones" de determinados hechos. Tal ocurrió con los Bandos Nos. 111 y 117 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia, que prohibieron informar acerca de las relegaciones dispuestas por la Junta de Gobierno, primero a un grupo de 7 dirigentes sindicales, y luego, a 12 dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (Noviembre de 1977 y Enero de 1978, respectivamente). En tales bandos se prohibió incluso informar acerca de la tramitación de recursos judiciales interpuestos en favor de estas personas.

F.- Situación Sindical.

La dictación de decretos leyes, en especial el 198, y de bandos por parte de las autoridades locales, ha inhibido la actividad de las organizaciones sindicales. Se impide la libertad de reunión, salvo que se solicite permi

so previo y se ha proscrito a los trabajadores la libertad de elegir sus representantes, de negociar colectivamente sus remuneraciones y de hacer uso del derecho a huelga al agotarse los medios legales para superar los conflictos.

Además, se ha desarrollado la acción directa, con beneplácito oficial, para imponer directivas sindicales en aquellos gremios importantes cuyos dirigentes discrepan de la política vigente. Además, se han organizado federaciones paralelas, adictas al gobierno en algunos sectores.

Cabe agregar, que la Central Unica de Trabajadores, que agrupaba a la inmensa mayoría de los trabajadores, ha sido declarada fuera de la ley por el gobierno.

Con motivo de la celebración del primero de mayo de 1978, el gobierno impidió mediante la violencia policial, la realización de un acto al que habían convocado con semanas de anticipación las más importantes Confederaciones y Federaciones Sindicales, traduciéndose dicha acción represiva en la detención oficialmente reconocida de cerca de medio millar de participantes. Hubo denuncias, por parte de dirigentes sindicales de maltrato a algunos detenidos.

G.- Situación de las Universidades.

Desde el once de Septiembre de 1973, las Universidades chilenas se encuentran intervenidas por el Gobierno, mediante la designación de rectores-delegados de las Fuerzas Armadas, que concentran el poder total.

Han sido eliminados todos los mecanismos de participación de la comunidad docente.

Han sido intervenidas las directivas estudiantiles y restringidas las actividades de los Centros de Alumnos.

La vida académica misma se ha visto sometida control político-ideológico por parte del gobierno. Ello se ha -- traducido en la expulsión masiva de docentes y alumnos que no concuerdan con el régimen; entre los docentes afectados se cuentan ex-rectores; ex-decanos y prestigiosos académicos. El control ideológico se expresa, además, en la vigilancia sobre los contenidos de la enseñanza, lo que ha creado un clima de temor que impide el libre desarrollo de las ideas. Se ha creado un curso de carácter obligatorio, para todos los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias, en el cual se imparte la Doctrina de la Seguridad Nacional, ideología oficial del gobierno militar.

A lo anterior débese agregar que la gama de sectores sociales que pueden ingresar a la universidad se ha reducido dramáticamente, debido al alto costo alcanzado por los estudios y que las bajas remuneraciones de los docentes han llevado a un porcentaje significativo de éstos a emigrar del país.